

Cuando el presidente Juan Manuel Santos admitió públicamente que el Gobierno y las Farc han adelantado “conversaciones exploratorias” con miras a un diálogo de paz, y agregó que se quiere “aprender de los errores del pasado para no repetirlos”, lo hizo porque ya existe un acuerdo en marcha, negociado con total hermetismo en La Habana (Cuba), y porque, cuando se piensa en errores, nadie duda que se refiere a la fallida experiencia del Caguán, donde justamente lo que hubo en exceso fue protagonismo, espectáculo y pocos resultados.

A La Habana se llegó esta vez después de un largo camino. No llevaba muchos días Santos en el poder cuando ya tenía propuestas sobre la mesa y su propia promesa de que no se iba a negar a buscar la paz. Entre las fórmulas a estudiar llegaron mensajes de la guerrilla explorando la posibilidad de establecer contactos, enviados a través de gente cercana al jefe de Estado. Incluso, antes de caer abatido por el Ejército en noviembre de 2011, el comandante Alfonso Cano había dado su respaldo a la idea de una posible negociación en el extranjero.

Finalmente, tras varios mensajes de ida y vuelta, se concretó el primer encuentro en La Habana. En representación del Gobierno estuvo el alto consejero Sergio Jaramillo y, a título personal, pero por obvias razones con toda la confianza del primer mandatario, su hermano, el periodista Enrique Santos Calderón. Las Farc llegaron con la vocería de Mauricio Jaramillo, alias El Médico, de quien se dice viajó desde el sur del país hasta Cuba gracias al apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en una aeronave oficial del Estado.

Y como era de esperarse, el primer punto de la agenda no podía ser otro que la seguridad. Pero no sólo la de quienes han apoyado la iniciativa o se puedan erigir como negociadores, sino de todo el entorno del eventual proceso. En otras palabras, cuando de errores del pasado se trata, no hay uno más grande que el exterminio de la Unión Patriótica, y por eso cualquier opción tiene hoy como punto de partida un capítulo de garantías de seguridad para el movimiento social que pueda acompañar el proceso y respaldarlo luego en la política.

Lo anterior significa que el primer paso de un eventual camino de diálogo hacia la paz, es la garantía para la participación política y el respeto a los derechos de la oposición. Sin esa condición, la expectativa de paz está muerta de entrada. A partir de ese punto común se trata de concretar una agenda que para la guerrilla tiene una preeminencia social, y para el Estado, en derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional. De prosperar la mesa, las otras prioridades son la reforma agraria y la desmovilización o dejación de armas, según la perspectiva de los interlocutores.

Como es lógico, no es un camino fácil ni rápido. Por eso la exigencia de que por ahora las

conversaciones se hagan en el exterior y con el máximo sigilo posible. Con la experiencia de haber vivido un proceso de paz, la exguerrillera del M-19 y directora del Observatorio para la Paz, Vera Grabe, precisó que la prudencia es fundamental. “Los procesos se desgastan con tanta palabra porque todo el mundo opina o quiere imponer sus puntos de vista, y así no puede ser. No se trata de que no haya transparencia, pero sí extremo cuidado al hablar”.

En ese orden de ideas, hoy está claro que las negociaciones se van a instalar en Oslo (Noruega), pero el trabajo de fondo se realizará en La Habana. Si no hay contratiempos, en muy pocos días estaría listo el acuerdo para empezar con el respectivo anuncio del presidente Santos. Con un detalle adicional: según una fuente consultada por El Espectador, el expresidente de Cuba, Fidel Castro, personalmente está empeñado en que esta vez se abra paso la paz para Colombia, pues la considera crucial para cerrar un ciclo histórico en América Latina.

En un contexto internacional tan exigente en materia de derechos humanos como el que existe hoy, cualquier acercamiento de paz entre el Gobierno y la guerrilla requiere acompañamiento. Por ahora, en esta tarea se apunta a que sean Venezuela y Chile los primeros garantes. No se descarta que después puedan sumarse otros países que han acompañado a Colombia en otros momentos de búsqueda de la paz. Por ejemplo, Francia, Suiza y España, que, por ahora, como el resto del mundo, permanecen a la expectativa de buenos anuncios.

Hay un tema clave que todavía no está claro pero que terminará siendo determinante: el cese al fuego. No obstante, es claro que tampoco puede demorarse porque la sociedad lo pondrá como su máxima exigencia. Al igual que el tema del narcotráfico, asunto vital para los intereses de Estados Unidos. Lo demás es buscar consensos y que cada día se sumen más sectores a la iniciativa. Por ejemplo, el Eln, que en algún momento podría agregarse o tener una mesa diferenciada.

Por ahora, hay muchas ideas en circulación y un tema de fondo: tratar de que las acciones armadas se detengan, porque nada desgasta tanto como tratar de negociar en medio de una guerra. Lo demás está por verse, en especial en materia de justicia. Para nadie es un secreto que los estándares internacionales de derechos humanos de hoy exigen un pacto distinto al que dominó por mucho tiempo de indulto contra entrega de armas. Pero también es cierto, como lo destaca Antonio Navarro, que nadie va a dejar las armas si no se le permite buscar el cambio por la vía política.

Así las cosas, desde este martes el país amaneció en otra tónica. Aunque persisten voces críticas que a raja tabla consideran nociva cualquier aproximación de paz con la

insurgencia, son mayores las voces de quienes creen que es el momento de darle una nueva oportunidad a la negociación política. Y, sin duda alguna, la clave, destacó el presidente Santos, es no cometer los errores del pasado, es decir, salvo en sus aciertos, que la nueva política de paz se parezca lo mínimo posible al aparatoso modelo del Caguán, donde hubo mucho micrófono y poca voluntad para negociar.

<http://www.elspectador.com/noticias/politica/articulo-370846-seguridad-primer-punto-de-agenda-de-paz>